

Haití: La Coyuntura de la Crisis y la Crisis Global del Sistema*

Gerard Pierre-Charles●

La coyuntura económica lleva la marca de cuatro grandes factores:

- a. El marasmo que acompaña a los eventos políticos que se han desarrollado a partir del verano de 1985, época que se abre con el referéndum de julio, culmina en febrero y se prolonga hasta nuestros días.
- b. La depresión económica y financiera que ha sacudido al régimen duvalierista a partir de 1980, cuando el mini-boom de los años 70, llamado pomposamente "revolución económica", se desinfla como un balón de cuero, bajo los efectos de factores a la vez estructurales y externos adversos y de la ineptitud de la corrupción.
- c. La degradación estructural, expresión de la crisis de la economía global.
- d. La desastrosa política económica del actual gobierno.

La coyuntura se caracteriza por una crisis a la vez financiera, económica y, naturalmente, social y política. Ella pone al desnudo las carencias, presiones y reivindicaciones que no podían

* Traducción del Dr. Salvador Rodríguez y Rodríguez.

● Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

expresarse durante el periodo anterior de opresión y que revisiten, por este hecho, un carácter particularmente agudo. Estas carencias de los sectores populares reflejan la terrible paradoja que constituye la existencia humana en Haití: los niveles exorbitantes de los precios, que se sitúan entre los más elevados del mundo, mientras que los ingresos, en términos reales y per cápita para la inmensa mayoría de la población, están entre los más bajos del mundo. Esta inmensa mayoría, de hecho, vive en la miseria extrema.

Al mismo tiempo, el desempleo golpea a más del 50 por ciento de la población en edad de trabajar, es decir 1 500 000 personas y que tiende a aumentar, ya que la tierra no alimenta más al hombre y el excedente de población agraria provocado por la crisis de la agricultura, se agrega al crecimiento natural de la población en edad de trabajar que no encuentra empleo. A estas razones estructurales se agregan los motivos coyunturales, el marasmo en los negocios, producto de la inevitable restricción, en periodo de dificultades, de las inversiones productivas y la contracción de los gastos. Esta situación no ha hecho, en verdad, más que profundizar la depresión que se dejó sentir en 1981-1983, cuando el país vivía aún la "paz duvalierista".

Los factores sociales y políticos de la coyuntura parecen difíciles de ser conjurados en un país como el nuestro, en donde tantas reivindicaciones legítimas han sido sofocadas desde siempre, y, sobre todo, en el curso de los 29 últimos años; en donde las clases dominantes, económicas y políticas, jamás se han preocupado por seguir una política real de desarrollo ni de aplicar medidas reformistas con el fin de disminuir la brecha existente entre el lujo, el desperdicio de los recursos y las necesidades insatisfechas de las masas. Es por ello que en nuestro país, los récords de la miseria se reflejan en los rostros trágicos de la mendicidad, la desesperanza y la cólera de centenas de miles de mujeres, de hombres y de niños. En este momento de la crisis del sistema y de la toma de conciencia del pueblo, los efectos de la coyuntura y la degradación estructural, en términos de la toma de la palabra y de la lucha por el mejor ser, difícilmente pueden ser borrados, incluso si se pretendiera

regresar a los viejos métodos de *Kraze zo* y de *Baboukèt* contra los cuales el país se sublevó.

Importa, pues, asumir la situación que se manifiesta sin maquillaje y sin mordaza ante los ojos de todos, con el fin de afrontarla con toda objetividad y eficacia.

Crisis política y marasmo económico

La crisis política que sacude a Haití desde hace más de un año, no ha dejado de repercutir sobre la economía. Pero, es importante señalar que en realidad la política no hace sino revelar la fragilidad del modelo económico, basado en la maquila y una dependencia acrecentada sobre el cual se quisiera fundar el desarrollo. Ella revela, a un nivel más profundo, la descomposición de las estructuras económicas y sociales del país.

Desde hace meses, el mundo de los negocios resiente los efectos de fenómenos coyunturales, tales como la interrupción de los pedidos gubernamentales y de los manotazos de dinero por parte de los altos funcionarios, la restricción de las inversiones y del crédito, de la especulación y de los negocios en general.

En cuanto al empleo, las causas de la contracción del mercado de trabajo no dependen de la sola inestabilidad política, como se evoca con frecuencia. El cierre de algunas fábricas y los despidos de obreros no se deben, como se ha querido hacer creer, al nacimiento de los sindicatos en las empresas o a expresiones, aún débiles e inarticuladas, de las justas reivindicaciones obreras a favor de mejores condiciones de trabajo y de vida. Aunque, el *déchoukage* ha permitido que también exploten las luchas obreras contra la carestía de la vida, los precios inflados que han impuesto los concesionarios exclusivos, contra el bloqueo de los salarios. Pero, en qué medida estas peticiones han tenido una incidencia real en la coyuntura, fuera de estimular la resistencia egoísta y reflejar intereses de los comerciantes y empleadores frente a una inaceptable reducción de sus beneficios, de algunos céntimos por unidad o por trabajador.

Ya el *Quartely Economic Review* publicado en Londres en 1985, se refería a los cierres de fábricas que habían alarmado a

la ADIH durante una reunión del sector privado con los organismos de desarrollo. Esto en una época en donde Haití era aún un paraíso para los inversionistas venidos de ultramar. Entre las razones invocadas entonces para explicar la fragilidad del sector de la maquila figuraban: los altos precios de la energía, el costo elevado de la vida que presiona desde abajo los salarios, la falta de infraestructura.

Estas causas profundas están orgánicamente ligadas a la incapacidad de las clases dominantes para poner en marcha el desarrollo que ellas pretenden promover. Esta realidad es imputable al Estado en su ineficiencia, y también, a los empresarios locales, quienes a la sombra del poder han acumulado beneficios fabulosos sin preocuparse de crear o de influenciar favorablemente el desarrollo nacional.

Crisis del modelo de desarrollo

La “revolución económica Jean-Claudienne”, cuyos resultados no son demasiado evidentes, pretendía beneficiarse de varios factores internacionales favorables, tales como:

- a. La ayuda extranjera masiva, multiforme, privada y pública que alcanzó en 15 años un monto superior a mil millones de dólares.
- b. Las transferencias bancarias y extra bancarias de los emigrados, que durante este periodo se han calculado en alrededor de mil millones de dólares.
- c. La maquila promovida por el capital extranjero y los empresarios locales, generadora de empleos y de exportaciones manufactureras que vino a impulsar la economía en un momento —en particular 1975–1978–1979— en el que los precios internacionales del café y del azúcar habían alcanzado verdaderos récords.

Más allá de estos factores externos, altamente favorables desde el punto de vista del crecimiento, cuales han sido los aportes internos a esta expansión. La política económica de exenciones fiscales favorecía las industrias de exportación en

detrimento de las industrias del mercado local. La susodicha planificación era de hecho una fórmula tecnocrática favorable a la apropiación privada y sin control de los ingresos públicos y de la asistencia externa; la creación de las empresas públicas o mixtas, los famosos “monopolios sobreprotegidos” eran concebidos como instrumentos de reforzamiento del Estado depredador y dictatorial. Todo esto, acompañado de la ineptitud administrativa, la corrupción y el terror, dio por resultado una industrialización frágil y dependiente al extremo, el abandono de la tierra, la desviación del trabajo productivo de millares de campesinos (convertidos en *tontons macoutes*, marginados urbanos), la baja de la producción y de la productividad agrícola.

La precariedad y la degradación de las estructuras fueron confrontándose, cada vez más, a las necesidades de una población que crece al 1.5 por ciento anual y que, además, como consecuencia de la emigración masiva, se ha visto expuesta a las normas de consumo de otras sociedades. Las aspiraciones de esta población tienden a aumentar, mientras el sistema es cada vez menos apto para satisfacerlas. Cada año 90 000 jóvenes en edad de trabajar se agregan al mercado laboral y más de la mitad permanecen sin empleo.

Se comprenderá fácilmente cómo la maquila, presentada desde hace 15 años y aún actualmente, como la gallina de los huevos de oro, no puede resolver los problemas del país, puesto que durante el periodo 1970–1985 apenas fueron creados 40 000 empleos en este sector (es decir menos de 3 000 por año), mientras que la “paz de los sepulcros” regía al país y los salarios pagados en la época, 2.54 a 3 dólares, representaban la mitad de los salarios de Taiwán y la décima de los de las regiones de la frontera México-USA.

Si es verdad que algunos millares de empleos han desaparecido estos últimos meses (12 000 según una visión catastrofista difundida por la ADIH desde el mes de junio), estas cancelaciones no pueden por ningún motivo ser imputadas, como lo afirma el sector privado y algunos responsables gubernamentales, al solo hecho de las reclamaciones obreras y de la agitación social y política.

Ya mucho antes de febrero, numerosas compañías habían levantado el ancla. A las limitaciones y desventajas relativas a

los altos costos de infraestructura, de energía y de mordidas, ellas debían atenerse a las condiciones cambiantes del mercado internacional de los capitales, de los intereses y de las utilidades. Es un hecho que, en el marco de la división internacional del trabajo, en mutación continua en el capitalismo actual, las "fábricas para el mercado mundial" establecidas hacia los años 50 y 60 en Puerto Rico, luego en Taiwán y Hong Kong, no constituyen más un modelo ideal de sobrebeneficios para las compañías transnacionales. Estas tienden, cada vez más a la robotización de sus operaciones en el territorio mismo de los USA. Incluso en una isla tranquila del Caribe, como lo es Barbados, los cierres de fábricas maquiladoras va en aumento.

Es cierto, durante los años pasados el modelo contaba, para optimizar sus beneficios, con la "tranquilidad" asegurada por el régimen de los Duvalier, la inexistencia de sindicatos y de huelgas. Pero, de esto a decir que los salarios de los obreros son demasiado elevados, o que los modestos ajustes de salarios que reclaman los sindicatos arruinarían a los empresarios, obligándolos a emigrar a otras riberas es simplemente querer explotar el candor de algunos, la inestabilidad en el empleo de los asalariados mismos o la falta de información del gran público.

El *New York Times* del 19 de julio de 1984, resaltando las ventajas ofrecidas por Haití, subrayaba que el costo de operación de una fábrica textil de 500 trabajadores era de 588 500 dólares en Haití; 789 800 en Costa Rica; 919 700 en la República Dominicana; 1 048 700, en Colombia; 1 057 600, en México; 1 156 700 en Panamá y 1 828 200 en Jamaica. Incluso, si en cierta medida estos datos se han modificado, durante los dos últimos años por los problemas de la devaluación en México, en Jamaica y en la República Dominicana, el margen de ventajas comparativas de Haití permite sostener y satisfacer algunas de las reivindicaciones, las más legítimas y apremiantes de los trabajadores, en términos de aumentos de salarios y de prestaciones sociales. De todas maneras, la fragilidad del modelo de la industria de ensamblaje pone de relieve su incapacidad para resolver los grandes problemas del empleo y del desarrollo.

Por su parte, el sector industrial para el mercado local, al

crear alrededor de 10 000 empleos, afronta limitaciones diversas: insignificancia del proceso de acumulación de capital, exportaciones masivas de capital por parte de una burguesía mercantil que se siente extranjera y que gana sobradamente en Haití, pero gasta su dinero e invierte su capital en el extranjero. A estos factores se agregan otros como: la ausencia total de una política de protección industrial, la institucionalización del contrabando, la estrechez del mercado local ligados a los hábitos de consumo de bienes importados de la población, a los desequilibrios de ingresos, a la exigüidad de los niveles de ingreso de los trabajadores en general y al desempleo generalizado en las ciudades y en el campo. Las posibilidades de crecimiento, incluso de supervivencia de la burguesía con vocación nacional, se encuentran así comprometidas y las de los contratistas de ensamblajes inciertas. Lo mismo que el desarrollo de las formas productoras y del capitalismo en el país.

Estos factores anti-desarrollo han sido reforzados estos últimos meses por la política fiscal y comercial del actual régimen, consistente en abrir, a tambor batiente, la economía nacional a la importación sin control y al contrabando. Los productores, abastecedores del mercado de consumo local han sido así fuertemente golpeados. A mediano plazo, tal orientación condena al desmantelamiento puro y simple del aparato productivo, construido durante décadas y al precio de tenaces esfuerzos por toda una categoría de empresarios. Ciertamente, muchos de ellos han aprovechado la corrupción reinante bajo la dictadura para obtener concesiones y precios de monopolio. Pero, estas distorsiones, o mejor dicho estos hechos que hacen pensar en una vuelta a las leyes originales de la acumulación primitiva del capitalismo, no pueden conducir a decretar la exterminación —en beneficio del capital internacional y de los comerciantes piratas— de este sector tan importante en las perspectivas de construcción de una economía nacional.

De hecho, las vicisitudes de la clase de los productores locales pone en evidencia la bancarrota del modelo de desarrollo que los diversos gobiernos han pretendido implantar desde 1915.

Ciertamente, es posible, en algún periodo de transición y de campaña electoral, prometer que los factores financieros y

económicos de la coyuntura serán controlados a partir de las muy famosas y semi-eternas "inyecciones masivas de dólares". Sabias elaboraciones tecnocráticas y demagógicas son ofrecidas: ¿no había anunciado la Alianza del Sector Privado en el mes de julio último, comentando un artículo del *New York Times* demasiado suave respecto del CNG, que era posible crear 60 000 empleos en los próximos 18 meses? Un industrial llegado del extranjero prometió, por su parte y como entremés de su campaña, la creación de 200 000 empleos.

Tantas promesas en el aire no consideran el costo de inversión de esos millares de empleos, y no tienen cuenta del contexto de la crisis internacional del capitalismo y de la profunda crisis Haitiana. Incluso durante los años setenta, caracterizados por el *boom* de los recursos externos, tales milagros no tuvieron lugar. Menos, ahora y mañana, cuando la crisis social Haitiana ha comenzado su nuevo ciclo. Cuando nuestro país resiente tan fuertemente los efectos del deterioro de la economía de los USA, la restricción de las importaciones americanas, del proteccionismo, del aumento del desempleo. Basta considerar la evolución del monto de las transferencias bancarias de los trabajadores emigrados en los USA, para medir estas recaídas desfavorables. Este monto, en efecto, pasó de 100 millones en 1980 a 127 millones en 1981 y a 90 millones en 1983. No es nada sorprendente, pues, que el ingreso per cápita haya pasado de 423 dólares en 1980 a 377 en 1985 —según los datos más optimistas— y los niveles de carencia y de miseria absoluta sean aún más dramáticos.

La degradación estructural

La desgracia del país, el fracaso de los programas de desarrollo surgidos del Estado y de los organismos internacionales, la exigüidad de las condiciones de vida de las mayorías, la incapacidad de las élites, todas estas expresiones evidentes del no funcionamiento del sistema, tienen por telón de fondo la crisis estructural de la economía y de la sociedad.

Esta crisis se manifiesta desde finales del Siglo XIX, cuando las estructuras precapitalistas establecidas por el Estado nacio-

nal comenzaron a resquebrajarse bajo la presión de las reivindicaciones y de las luchas sociales de una población en crecimiento. Crisis que la ocupación americana, en la lógica de sus motivaciones imperiales, no pudo más que aligerar en el sentido de una cierta modernización y de una modesta expansión de las relaciones capitalistas. Crisis en la cual nos debatimos más de 50 años después de la partida de los "marines", a pesar de las gesticulaciones de nuestras clases dominantes prestas a acoplarse al molde gestor, a las injerencias del imperio y a las directivas del FMI. Crisis de estos años ochenta en los que Haití, tributario del mercado capitalista, comienza a sufrir severamente las restricciones debidas a la contracción del comercio internacional, al alza de las tasas de interés, a los efectos acumulativos de la subida de los precios del petróleo; crisis que debe ser colocada en el centro de los debates para una comprensión real de nuestros problemas y la búsqueda de las soluciones.

Los elementos de esta situación están al nivel del arcaísmo de las estructuras agrarias, del carácter mismo y del raquitismo del sector industrial, en la distribución contrastante de los ingresos de la población, en la naturaleza no soberana, subalterna de nuestras relaciones internacionales, en la orientación de la acción estatal en materia económica, financiera y fiscal.

Los déficit de nuestras transacciones internacionales hacen parte de esos recursos bombeados del cuerpo social por nuestros poderosos socios extranjeros, quienes se benefician del producto del sudor de nuestros campesinos y de nuestros trabajadores en general. Es el caso de la deuda externa pública que es del orden de los 650 millones y de 800 millones incluyendo las obligaciones del sector privado. Si en 1986, nuestro país pagó 19 millones de dólares por el servicio de su deuda, los desembolsos previstos para 1987 se sitúan en cerca de 40 millones. En este dominio, conviene subrayar cómo nuestra amplitud al pagar la deuda contrasta con la política de numerosos países del Tercer Mundo y de América Latina en particular, incluyendo nuestro vecino, la República Dominicana bajo el actual gobierno de Balaguer, quienes se niegan a arrodillarse frente a la banca internacional y declaran no poder pagar su deuda externa. Tal actitud va más allá de las exigencias del FMI en

favor del pago riguroso de la deuda, cualquiera que sea el grado de miseria o de crisis del país deudor. Así, los millones prestados y despilfarrados por los Duvalier a expensas del pueblo, son canalizados hacia los acreedores de ultramar.

La política económica del neoliberalismo dependiente

Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una política miope que pretende bajar los precios de los bienes de consumo a través de la importación masiva y la promoción del contrabando, y que tiene por efecto convertir a nuestros productores agrícolas, industriales o artesanos en vendedores de artículos extranjeros. Una política que arruina las regiones de arroz, de chícharos, de papas y que quiere convertir a Haití en un abastecedor de frutos y cítricos para la metrópoli. Una política sistemática de desmantelamiento de las empresas del Estado y de ruina de los empresarios nacionales que no han exportado sus capitales al extranjero y quienes, en un difícil combate, han llegado a crear fábricas en este país, que dan trabajo a los haitianos.

Conviene subrayar que la incoherencia de esta política económica se debe al hecho de ser el resultado de varios elementos inconexos que no pueden ni atacar la crisis global, ni paliar la coyuntura, sino más bien agravarla. Los elementos de esta amalgama son, entre otros:

- a. La rutina estatal —llevada a su más alto nivel por el duvalierismo— del fraude, favoritismo, incompetencia en materia de administración.
- b. Las injerencias del Banco Mundial y del FMI quienes encuentran un eco particular en las disciplinas de la escuela de Chicago.
- c. Las imposiciones de la AID, en tanto que “ministerio de las colonias”, encargado de aplicar el plan americano para Haití.
- d. Los intereses de la burguesía contrabandista y sus cómplices.

Como se sabe, el neoliberalismo en tanto que política eco-

nómica oficial de la Administración Reagan surgió para hacer frente a la crisis y reactivar la economía de los USA a partir de un nuevo modelo de acumulación; sus fundamentos han sido la supresión del *welfare* y de las prestaciones sociales en general, la contracción de los gastos presupuestales, la administración de la masa monetaria con el fin de reducir la demanda interna y equilibrar la balanza comercial de los USA, el aumento de la deuda interna, la elevación de las tasas de interés, el cierre y privatización de las empresas de Estado. Esta política, si acaso ha tenido un éxito evidente a corto plazo, permitiendo a la metrópoli acumular una parte importante de las reservas de liquidez del mundo capitalista, en los países dependientes se ha revelado catastrófica. . . entre otras razones, a causa del severo proteccionismo aplicado por el imperio. Pero, sobre todo, como ha podido observarse en el caso de Chile, bajo el gobierno de Pinochet, o de Jamaica, con Seaga, a causa de su incongruencia en el caso de los países subdesarrollados. Se puede avanzar la hipótesis según la cual cuanto más subdesarrollado es un país, más grande es la ineficacia de las recetas neoliberales, las cuales no pueden en ningún caso activar o reactivar una economía golpeada por una crisis estructural.

La aplicación de tal política entre nosotros, pretende crear las condiciones ideales para la asimilación de Haití a la economía norteamericana, operación que la ocupación de 1915 intentó vanamente, y que no ha tenido éxito desde entonces, a pesar de que nuestras clases dominantes lo hayan intentado bajo todas las formas.

En su versión más reciente, esta política se funda sobre tres ejes principales: la política de saneamiento fiscal y de equilibrio presupuestario, el endeudamiento incondicional y la baja aparente del costo de la vida a partir del contrabando institucionalizado.

La política de saneamiento fiscal, aplicada según las directrices del Banco Mundial y del FMI ha introducido, sin duda, un poco de orden dentro de la anarquía calculada que han representado las finanzas públicas del duvalierismo. Se ha procedido a la eliminación de funcionarios, la supresión de incontables aviadores que mermaban el presupuesto. Sin embargo, podría preguntarse si el rigor de algunas de estas medidas que han gol-

peado a los pequeños bolsillos, a veces incluso a pensionados que normalmente tienen derecho a su pensión, se han extendido a nivel de las partidas elevadas de salarios en donde su alcance sería más eficaz en términos de economía de recursos. La reducción de los desequilibrios presupuestales ha sido extremadamente modesta, obligando al Estado, como antes, a recurrir a la "ayuda generosa" del gran vecino.

Nuevas obligaciones son contraídas con el extranjero que hipotecan aún más, en el plano financiero y político la soberanía nacional. De febrero de 1986 a febrero de 1987, el gobierno ha recibido, por diversos conceptos, alrededor de 100 millones de dólares bajo formas de préstamos o de donativos. Una parte de esta asistencia es devuelta a los acreedores de las finanzas internacionales; otra parte ha sido destinada a disminuir el déficit fiscal, el resto es utilizado para la creación de empleos de urgencia. Sobre todo para la reparación de carreteras y de urbanismo, con el fin de combatir el desempleo: ¡una gota de agua en el mar!

En el activo de esta política puede anotarse el descenso en los precios de ciertos artículos de consumo (arroz, aceite, ropa usada), traídos del exterior por el canal del contrabando masivo y oficializado y de la liberación de las importaciones regulares. Esta baja no ha tenido por efecto abatir efectivamente el costo de la vida, puesto que ha sido concomitante al alza de los precios de toda una serie de bienes y servicios esenciales. De ello han resultado efectos de acumulación de ingresos y beneficios de una minoría de negociantes, en detrimento de los productores directos, industriales y agrícolas. Estos últimos, frente a la invasión y estrechamiento del mercado interno por el arroz de Miami o los artículos manufacturados del contrabando, han reducido su nivel de operación, lo que aumenta el marasmo de los negocios.

Así, los elementos de intervención financiera del Estado frente a una situación tan grave de crisis social y política, ilustran la miseria de las políticas gubernamentales en el terreno económico y social. De ahí la necesidad de reforzar el autoritarismo y consolidar el poder desde el punto de vista técnico y militar, necesidad que resienten no solamente los sectores más duros del poder sino también las autoridades.

En definitiva, la crisis del sistema puede medirse no solamente por los resultados económicos y sociales, sino y sobre todo, por la incapacidad de las clases dominantes a encontrar una solución a los problemas que afligen al país. Son los mismos senderos trillados y retrillados desde la ocupación norteamericana, los mismos discursos, la misma retórica, los mismos remedios propuestos por los detentadores del poder de antaño, de ayer y de ahora, y por aquellos que pretenden el poder. Mientras nuestro pueblo se hunde cada vez más en la miseria, mientras la crisis en sus múltiples expresiones y en su causalidad profunda exige soluciones originales, revolucionarias, imaginativas para encarar al desafío que implican el desarrollo y la supervivencia misma de Haití en tanto que nación.